

C.A. de Santiago

Santiago, veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y OÍDOS:

En proceso RIT N° 158-2024 / RUC N° 2300961113-4 del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de fecha nueve de septiembre de dos mil veinticuatro, las magistradas Ocampo Méndez, Gajardo Fontecilla y Muñoz Jaramillo, en lo pertinente, resolvieron condenar a don DANIEL ALEJANDRO ARENAS MALTEZ, cédula nacional de identidad N° 19.857.961-0, a sufrir la pena de SIETE AÑOS de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por su responsabilidad como autor del delito consumado de robo con violencia, perpetrado en la comuna de Lo Barnechea de la ciudad de Santiago, el 4 de septiembre de 2023. No reuniéndose respecto del sentenciado los requisitos requeridos para la sustitución de la pena privativa de libertad que le fuere impuesta, deberá cumplirla efectivamente, sirviéndole de abono el tiempo que ha permanecido ininterrumpidamente en prisión preventiva con ocasión de este procedimiento. Asimismo, se dio lugar al comiso de un DVD, un gorro de lana marca Lipi, un polerón negro, un pantalón de buzo negro y un par de zapatillas. Se le eximió al sentenciado del pago de las costas de la causa y se incorporará su huella genética al Registro de Condenados.

En contra de esta decisión, la defensa del acusado dedujo recurso extraordinario de nulidad por el motivo absoluto previsto en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, esto es, *“Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letra c)”*, en relación al



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYLMXRQDQMG

artículo 297 del mismo cuerpo normativo, por cuanto ha estimado que se ha vulnerado el principio de la lógica en la valoración de los medios probatorios, en particular la razón suficiente, en su vertiente de corroboración.

En subsidio, invocó la causal de nulidad del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal contra la sentencia, por incurrirse en una errónea aplicación del derecho en la cuantificación de la pena corporal.

Solicitó en concreto que se anule el juicio y la sentencia, con arreglo a los artículos 385 y 386 del Código de Enjuiciamiento Criminal, ordenándose la realización de un nuevo juicio oral ante un tribunal no inhabilitado o se dicte una sentencia de reemplazo, respectivamente.

Se declaró admisible el recurso -oportunidad y forma-, procediéndose a su vista en la audiencia del cinco de noviembre de dos mil veinticuatro, asistiendo los representantes de la defensa y del Ministerio Público -no así del querellante particular-, fijándose como fecha para la comunicación de la sentencia el día de hoy.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: La sentencia definitiva que se impugna dio por probados los siguientes hechos:

*“Con fecha 04 de septiembre de 2023, siendo las 20:10 horas aproximadamente, el acusado DANIEL ALEJANDRO ARENAS MALTEZ, concurrió en compañía de un número de sujetos indeterminado y aún no identificados hasta el inmueble ubicado en (**domicilio reservado**), comuna de Lo Barnechea. Inmueble que sirve de casa habitación. En el lugar, procedieron a forzar la reja perimetral que sirve de protección a la propiedad realizando un forado por el cual ingresaron al recinto. Escalaron*



hasta la ventana del dormitorio principal por la cual accedieron al interior de las dependencias en las que en esos momentos se encontraban las víctimas OLGA ESCOBEDO BACA, asesora del hogar, y la niña de iniciales L.E.M.B. de 16 años de edad. En el lugar registraron las dependencias en busca de especies que sustraer momento en que la víctima de iniciales L.E.M.B. se percató de los hechos y se encierra en el baño, procediendo a solicitar ayuda vía WhatsApp. Por su parte, la víctima OLGA ESCOBEDO, al percatarse del ingreso de los sujetos salió hacia las escaleras, momento en que se encontró con unos de ellos quien se abalanzó hacia ella, le apuntó con un elemento con apariencia de arma de fuego que portaba y le exigió que le señalara la ubicación de las especies de valor, a lo que la víctima respondió desconocer dicha información, por lo cual el sujeto la golpeó en la cabeza con el elemento con apariencia de arma de fuego, la lanzó al suelo, luego le tiró el cabello y, a la fuerza, la subió por las escaleras hasta el 3er piso, lugar en el que se encontraban otros sujetos registrando las dependencias. En el lugar uno de ellos se hizo de unos cordones de calzado y otro de ellos, el acusado, usando esos cordones, le ató las manos y la obligó a tenderse en el piso, siendo intimidada en todo momento con un elemento con apariencia de arma de fuego. El acusado y copartícipes se percataron de la llegada de personas al domicilio por lo que, llevando las especies que sustrajeron, saltaron por una ventana al exterior desde bastante altura y luego se dieron a la fuga, lesionándose el acusado por esta acción.

Sustrajeron especies tales como un arma de fuego tipo pistola, marca Smith and Wesson, número de serie FCH9530, calibre 9x19, N° de inscripción 941627, dos cargadores sin



cartuchos, un computador tipo notebook color plateado, diversas joyas.

Como consecuencia de la agresión, la víctima OLGA ESCOBEDO, resultó con lesiones, descritas en el dato de atención de urgencia como “AVO frontal con equimosis izquierda dolorosa a la palpación” y se diagnostica como “contusión en la cabeza”.

SEGUNDO: Dicho núcleo fáctico constitutivo del delito de robo con violencia tipificado en el artículo 436 del Código Penal, congruente con los hechos descritos en la acusación fiscal y del querellante particular, se justificó fundamentalmente de la forma establecida en el Considerando Sexto de la sentencia, a saber: al tenor del testimonio de la víctima menor de edad de iniciales L.E.M.B., la de su padre, hermano, la de los funcionarios aprehensores y el policial que desplegó el procedimiento posterior de reconocimiento, aunada a la prueba audiovisual y a la documental incorporada en el juicio.

I En cuanto al motivo principal

TERCERO: La defensa invocó como primera causal del recurso de nulidad, la contemplada en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, esta es, “*Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letra c)*”, en relación al artículo 297 del mismo cuerpo legal, verificándose en la sentencia al momento de establecer los hechos que se tienen por acreditados, una contravención a las reglas de la lógica, en concreto al principio de razón suficiente, en su vertiente de corroboración.

Sostuvo que la sentencia pronunciada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, al dar por establecida la participación del acusado en el delito de robo con



violencia ocurrido con fecha 4 de septiembre del 2023, desatendió los parámetros de libertad valorativa de la prueba exigidos, toda vez que se infringió el principio de razón suficiente, concordante con el principio de corroboración, por no haber contado en la audiencia de juicio con la única testigo presencial y víctima de los hechos atribuidas a Arenas Maltez, siendo todos los demás personas que depusieron en juicio meros testigos de oídas, estimando que sus dichos no constituyen antecedentes suficientes para determinar inequívocamente un fallo condenatorio en contra del acusado.

Afirmó que al no haberse rendido en juicio evidencia que respalde la información introducida por terceros que no estuvieron presentes al momento de producirse los hechos ilícitos juzgados, se carece de fundamentos capaces de atribuirle responsabilidad al acusado, incurriendo los sentenciadores en una errónea valoración de los medios de prueba rendidos en juicio oral.

CUARTO: Sin embargo, de la sola lectura de la sentencia se advierte que el adjudicador de hechos ha explicitado cada uno de los medios de prueba que permitieron inferir la existencia o veracidad de los contornos facticos de la acusación, sin transgredir las reglas de epistemología general, ni elaborar premisas con contenido empírico tenidos como verdaderos, sin verificar de manera clara y distinta, cada uno de los hechos u objetos que describe.

Por el contrario, se observa que la prueba de cargo está desprovista de ripios, inconsistencias o contradicciones relevantes, más allá de toda duda razonable, justificándose las conclusiones sobre la participación del acusado en las acciones penalmente relevantes contenidas en la acusación.



En efecto, si bien es cierto que la trabajadora de casa particular que presenció directamente los eventos investigados por el Ministerio Público no prestó su testimonio en el juicio y que la adolescente de iniciales L.E.M.B. reconoció en estrados que no vio a los antisociales por haberse encerrado en el baño de su pieza, el tribunal a quo pudo arribar a la convicción sobre la participación del acusado Arenas Maltez en los hechos ilícitos que se le atribuyeron, por medio de otros medios de prueba.

Desde luego, el fallo destaca los testimonios brindados por el Subteniente de Carabineros de Chile Manuel Ignacio Ortega Donoso y el Cabo Primero de Carabineros José Luis Fuentes Espinoza, los que aseveraron que participaron directamente en la detención del acusado en situación de flagrancia, a escasa distancia del sitio del suceso, con una evidente cojera por la lesión provocada al huir del inmueble afectado, el que incluso les reconoció que los demás partícipes lo dejaron solo.

Este evento de persecución quedó registrado en imágenes captadas por un dron de Seguridad Ciudadana de la comuna de Lo Barnechea. Al respecto, el Considerando Octavo del fallo en cuestión explica que los funcionarios policiales que participaron en la detención del acusado lo hicieron *“gracias al seguimiento efectuado por un dron de la municipalidad, lograron dar con el sujeto a escasa distancia del lugar del suceso (...), imputado que por lo demás es reconocido directamente en la audiencia por los referidos agentes policiales Manuel Ignacio Ortega Donoso y José Luis Fuentes Espinoza, a quienes además, el acusado al verse acorralado al momento de su detención, espontáneamente habría referido con palabras soeces que los otros sujetos lo habrían abandonado. Destacándose, además, que el lugar de detención del acusado corresponde precisamente aquel al cual podía*



accederse desde la zona bajo la ventana por la cual escaparon del inmueble afectado, siguiendo la misma trayectoria, siendo un sector semi rural, sin que se apreciara en el video obtenido por el dron que se exhibió en audiencia, la presencia de otro animal o persona, por lo que la presencia del sujeto en aquel lugar no tiene otra explicación más que haber intentado huir por aquel sector junto a sus compañeros de delito”.

La sentencia de marras sigue: *“Dicha huida no pudo concretarse por haberse lesionado en su pierna derecha, por lo que también ha de considerarse que la participación del acusado en los hechos ha quedado suficientemente acreditada, además, con la documental N° 2, Dato de atención de urgencias del imputado, emitido por el Hospital El Salvador, Urgencia (...) Presenta caída de aprox 3-4 piso (...) Diagnóstico: fractura de calcáneo (...).”*

Adicionalmente las sentenciadoras razonan que los funcionarios policiales Esteban Adolfo Castro Tobar y Matías André Zúñiga Caro, constataron que la víctima Olga Escobedo Baca, trabajadora de casa particular, reconoció en un kárdex fotográfico al acusado, pocas horas después de los hechos, diligencia en que *“se cumplieron con todas las garantías que exige la normativa respectiva para no influir un falso reconocimiento, coincidiendo en que la referida víctima, pudo ver a los antisociales y tuvo 100% de certeza al reconocer a Arenas Maltez como uno de los partícipes del atraco, siendo precisamente quien la habría atacado, lanzándose posteriormente por la ventana al percatarse de la llegada de personas”.*

QUINTO: Por lo precedentemente expuesto, esta Corte no logra divisar la infracción al principio de la lógica en la fundamentación de la sentencia impugnada, toda vez que la



participación del acusado se ha basado en el testimonio de los funcionarios policiales aprehensores, quienes lo sorprendieron en las inmediaciones del lugar, ayudado por la información que era captada por un dron operado por funcionarios de seguridad de la Municipalidad de Lo Barnechea, a quienes el propio imputado explícitamente reconoció que los otros autores lo dejaron abandonado, dada su escasa movilidad provocada por la caída durante la huida de la casa habitación afectada, lo que fue corroborado con un informe de lesiones.

Debe tenerse presente que los Carabineros Manuel Ignacio Ortega Donoso y José Luis Fuentes Espinoza, no prestaron declaraciones judiciales como simples testigos de oídas que escucharon casual o espontáneamente lo relatado por un tercero que no declaró en juicio ni como testigos preconstituidos del órgano de persecución penal con el fin de introducir ilegítimamente los registros de la declaración policial de la testigo presencial ausente, sino en calidad de testigos presenciales que actuaron en persecución del acusado, al que finalmente detuvieron en situación de flagrancia.

SEXTO: En consecuencia, esta Corte no visualiza que las conclusiones a las que se arriban en la sentencia, en base a los enunciados fácticos que se dieron por acreditados suficientemente, carezcan de lógica, pues dicha información se ha argumentado y comunicado con corrección y suficiencia, a saber: de manera comprensible y determinante, con un razonamiento reproducible y corroborado con distintas fuentes, por lo que no cabe más que concluir que en el caso en cuestión no se configura la causal de nulidad impetrada -artículo 374 letra e) en relación con lo dispuesto en los artículos 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal-, resultando forzoso desechar el recurso de nulidad interpuesto por la



defensa de Daniel Alejandro Arenas Maltez fundado en dicho motivo de irregularidad absoluta en el pronunciamiento de la sentencia (*vitium in iudicando*).

Independientemente de su mérito, la sentencia recurrida está suficientemente motivada (juicio sobre el juicio): posee una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, a través de una valoración de todos los medios de prueba rendidos por los intervinientes, y percibidos directamente en el juicio oral (visto y oídos), en la que se utilizó un método lógico inferencial explicitado, que permitió fundamentar y aceptar dichas conclusiones de acuerdo con los criterios de la sana crítica racional, sin refutar los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, derrotando la presunción de inocencia del acusado.

II En cuanto al motivo invocado en subsidio

SÉPTIMO: La recurrente alegó como segunda causal del recurso deducido en contra de la sentencia, en subsidio de la primera, la prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, *“Cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”*, en relación a lo dispuesto en los artículos 68 y 69 del Código Penal.

A su juicio, el error que incurrió el tribunal se relaciona con la infracción al principio del non bis in ídem del artículo 63 del Código Penal, que limita el *ius puniendi*, garantía del acusado, al determinarse el quantum de la pena, que consideró aspectos ajenos a la extensión del mal causado, conforme el artículo 68 el mismo código.



OCTAVO: Resulta útil recordar que el recurso de nulidad es un medio de impugnación de la sentencia, de derecho estricto, excepcional y circunscrito a los motivos especificados en la ley, que en la presente alegación está centrado en la determinación de la pena, de aplicación discrecional, casuística y de exclusiva competencia de los jueces del fondo -y no de esta Corte-, en base a los hechos evidenciados y asentados directamente durante el juicio.

En la fijación de la pena exacta, el tribunal debe tener en consideración, primeramente el número y entidad de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, así como la mayor o menor extensión del mal producido por el delito, factor asociado a las repercusiones y consecuencias culpables del ilícito, extratípicas y objetivamente imputables al comportamiento típico del condenado.

NOVENO: Esta regla de carácter general ha sido respetada por las juezas del grado, quienes adjudicaron la extensión de la pena corporal, con arreglo a los criterios precisamente estipulados en los artículos 68 y 69 del Código Penal.

En efecto, al haberse establecido que concurre al respecto del sentenciado una circunstancia atenuante de responsabilidad penal, a saber: su irreprochable conducta anterior, sin agravantes, el tribunal al recorrer la extensión de la pena asignada al delito de robo con violencia -presidio mayor en sus grados mínimo a máximo- únicamente le queda prohibido la imposición en su grado máximo, pudiendo, en consecuencia, imponérsele una pena entre los cinco años y un día a quince años de privación de libertad.

A pesar de que parte de las especies sustraídas no fueron recuperadas, incluida un arma de fuego, las sentenciadoras



optaron por imponer la pena corporal en el tramo más bajo (de cinco años y un día a diez años), pero descartando su mínima expresión (cinco años y un días), atendida la extensión del daño o mal causado, intencionado o no, consistente en el temor infundido a una menor de edad víctima -encerrada en un baño durante el asalto envió mensajes a sus padres despidiéndose- y a su núcleo familiar, lo que implicó un cambio radical de sus estilos de vida, sin perjuicio de la trabajadora de casa particular extranjera que golpeada huyó de Chile, circunstancias que por sí mismas no forman parte ni son inherentes al tipo penal de robo con violencia, de tal forma que no se infringe el principio *non bis in ídem* o prohibición de doble valoración, regulados en el artículo 63 del Código Penal.

Además, debe tenerse presente que el audiencia de determinación del *quantum* de la pena no hubo presentación de antecedente alguno que justificara la imposición de la pena más baja dentro del tramo mínimo en cuestión, como lo solicitó la defensa, a sabiendas que el artículo 69 del Código Penal no es una norma que obliga al tribunal a aplicar la pena dentro de un grado y extensión determinados.

DÉCIMO: En consecuencia, no existiendo una errónea aplicación ni interpretación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, consignando la sentencia recurrida las explícitas valoraciones en la cuantificación específica de la pena dentro de los parámetros legales ajustados al principio de proporcionalidad e intensidad del injusto, no cabe sino rechazar el recurso deducido también en este acápite.

Y en virtud, además, de lo dispuesto en los artículos 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza**, sin costas, el recurso de nulidad deducido por doña María José Canessa Ferrer,



defensora penal pública, en representación del condenado Daniel Alejandro Arenas Maltez, en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha nueve de septiembre del año dos mil veinticuatro, en autos RIT N° 158-2024 / RUC N° 2300961113-4 del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, y en consecuencia, se declara que dicho fallo no es nulo.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción del Ministro (I) señor Guzmán Fuenzalida.

Ingreso Corte (Penal) N° 5608-2024.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYLMXRQDQMG

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Carolina S. Brengi Z., Ministro Suplente Fernando Guzman F. y Abogado Integrante Luis Hernandez O. Santiago, veintidos de noviembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintidos de noviembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYLMXRQDQMG